

3

Producciones colectivas en tiempos de pandemia

Jóvenxs investigadorxs del IDAES
discuten impactos sociales,
económicos y culturales del
COVID-19

¿Qué pone la cuarentena sobre la mesa?

Debates sobre soberanía
alimentaria y economía
popular

Julieta Monzón

Doctoranda IDAES | UNSAM

Profesora Adjunta, Cátedra de Economía Agraria, FAUBA

Andrea P. Sosa

Becaria postdoctoral IDAES | UNSAM - CONICET

Centro de Estudios Socioterritoriales, de Identidades y de Ambiente (CESIA)

Programa de Estudios Rurales y Globalización (PERyG)



Introducción

Salías de tu casa, tomabas el colectivo, el tren, el subte, más o menos apretadx contra otros cuerpos. Si tenés hijxs, posiblemente lxs dejabas en la escuela confiando en que algo les darían para comer. Agarrabas la sube, la billetera, el pasamanos, de repente te rascabas un ojo. En el trabajo le dabas un beso a todo el mundo al saludar, tomabas mate con tus compañerxs. Volvías en el bondi, o en el subte, más o menos apretadx, y te hacías una escapada al súper. Changuito en mano, recorrías las góndolas con desgano y con apuro para llegar a casa con algo para cenar. Si estabas sin ganas, simplemente recurrías a Rappi, Glovo o la rotisería de la esquina.

Como sabemos a ciencia cierta, la de la propia experiencia, eso por ahora se interrumpió. Desde que empezó la cuarentena nos enfrentamos a una reducción de los negocios que venden comida, procedimientos engorrosos para hacer compras, largas colas, escasez de algunos productos y, sobre todo, precios usurarios en más de un supermercado, almacén, carnicería o verdulería. Así como dábamos por sentada la posibilidad de subirnos a un medio de transporte o compartir un mate, tampoco solíamos preguntarnos de dónde, cómo, a través de qué mecanismos y en la interrelación de qué personas, instituciones, organizaciones, corporaciones y organismos estatales se produce, distribuye, comercializa y consume lo que llevamos a la mesa (o devoramos frente a la pantalla de la tele o la computadora). La pandemia nos llama a desfeticizar nuestra alimentación, una vez más.

En primer lugar, las escuelas revelan de la manera más brutal una de sus funciones sociales reales: la de alimentar a sus alumnxs. Cientos de maestrxs se encuentran actualmente entregando comida a sus estudiantes, y demandando, junto a padres y otros actores de la sociedad civil, que las entregas se hagan en cantidades suficientes, y que se mejore la calidad, para que exceda el sanguchito de una feta y la barrita de jarabe de azúcar. En marzo, apenas eran 23,5 pesos por alumnx los que dedicaba, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires para el desayuno diario en las escuelas. En Capital, así se ve el almuerzo entregado en escuelas públicas durante la cuarentena (Imagen 1), y este es el bolsón entregado a las familias en los [comedores escolares de Rosario](#) (Imagen 2), donde se encuentra uno de los puertos de exportación de productos agrícolas más importantes del país:



Imagen 1. Almuerzo entregado en escuelas públicas durante la cuarentena



Imagen 2. Bolsón entregado a las familias en los comedores escolares de Rosario

¿Cómo esperar que la población no se enferme (o estudie, por ejemplo) si desde la niñez come así de mal?

La cosa se pone más pesada, como sucede inexorablemente, en las barriadas populares y los sectores informales de la economía, que no llegan ni a intentar hacer la cola del supermercado. A los millones de pobres estructurales que dependen de hacer al menos una comida al día en los comedores y merenderos ahora se suma la demanda de quienes para comer necesitan vender su fuerza de trabajo o hacer changas todos los días, día a día, pero que no pueden sin ser detenidos, maltratados, multados y/o coimeados por la policía.

Resulta cada vez más evidente que a la pandemia se le hace frente no con menos sino con más Estado, y Argentina es uno de los casos que, en ese sentido, representan un faro para América Latina: poco después de declarar la cuarentena, se tomaron medidas para proporcionar ingresos a los desocupados, monotributistas de menores ingresos, trabajadores informales. Pero esto no alcanza para frenar el aumento en la demanda de alimentos, ciertamente uno de los puntos más sensibles y urgentes, expresado en comedores y merenderos desbordados, que revelan de manera cruenta las contradicciones de un país donde, se dice, se produce alimentos para 400 millones de personas (aclaremos de paso que ese cálculo no es exacto, ya que no todo eso se destina a alimento humano, sino principalmente a alimento animal y biocombustibles).

Para paliar esto, otra de las acciones del Estado consiste en abrir licitaciones para grandes comercializadoras de alimentos no perecederos (luego del escándalo por los sobrepuestos de las primeras licitaciones se está en conversaciones con grandes procesadoras como Molinos Río de La Plata), en general de escasa calidad nutricional, y hacerlos entregar por el ejército o las organizaciones sociales en los territorios más vulnerados. También se busca implementar, con menor o mayor efectividad, el control de precios de los alimentos y otros productos básicos, que aumentan como por arte de magia sin que necesariamente se incrementen los costos de producción, especialmente en los comercios de cercanía (de hecho para lidiar con los aumentos de precios en comercios chicos se delegó el control a municipios y gobiernos locales). Sin embargo, la emergencia alimentaria, montada sobre el hambre estructural, no da tregua.

Además, no parece evidente en estas acciones que gran parte de los alimentos que consumimos, especialmente los frescos (frutas, verduras), provienen de la pequeña y mediana producción, por lo que estas compras estatales a actores concentrados terminan beneficiando a una de las fuentes del problema que genera hambre y exclusión. Esto se debe a que una de las opciones que tienen estos productores para ubicar sus hortalizas en el mercado es vender a intermediarios que luego los llevan a mercados concentradores, como el Mercado Central, que sigue funcionando. Dada su posición dependiente, para que la producción no se eche a perder, muchas veces deben someterse a pagar los precios indicados por estos intermediarios. En la venta a "culata de camión" son los mayoristas los que realizan la transacción y definen el precio que luego recibirá el productor que le consignó el alimento; sin ningún poder de negociación de precio ni condiciones, termina recibiendo solo un pequeño porcentaje del precio de venta minorista al público. Para dimensionar estos canales, solo en el Mercado Central de Buenos Aires se mueven aproximadamente 26.500 toneladas semanales de frutas y hortalizas. Otra de las opciones que tienen es vender a los supermercados que hacen contratos de integración vertical a través de los cuales definen qué se produce y cuánto se paga por el producto. Por último, otra dependencia asociada a estos canales de comercialización responde a que este tipo de producción, que debe conseguirse en cantidades fijadas exógenamente y responder a determinadas características, es sumamente dependiente de insumos externos, y por lo tanto de las subas del dólar, aumentando con ello la inflación.

Para hacer frente a estas vicisitudes, miles de productores se organizan para crear formas alternativas de producción y comercialización. En cuanto al primer aspecto, la transición hacia la agroecología les permite disminuir la dependencia de insumos externos, y por lo tanto mantener la mayor parte de sus costos en pesos (cada vez menores a medida que se avanza en las transiciones). En cuanto al segundo, la conformación de canales alternativos de comercialización

permite disminuir la cantidad de intermediarios y establecer precios justos para productorxs y consumidorxs. Esto forma parte de otra economía, de carácter popular y solidario que, en el otro extremo de los grupos concentrados, se yergue, sobreviviendo y hasta expandiéndose, pese al abandono casi permanente, las dificultades propias de la pequeña escala, y la falta de “espalda financiera” que sí tienen las grandes comercializadoras. Desde la década de 1990, y sobre todo con el comienzo de este siglo, este nuevo paradigma viene emergiendo, primero acompañando el surgimiento de los nuevos movimientos sociales que buscan salidas creativas y solidarias al desempleo y el hambre generados por la economía de mercado y las crisis del capitalismo, y que ha logrado en algunos ámbitos mayor visibilización e institucionalización.

Experiencia tras experiencia, se vienen multiplicando esfuerzos colectivos de producción y comercialización de alimentos en el marco de la soberanía alimentaria, la agroecología, el comercio justo, y la economía social, solidaria y popular, donde distinto tipo de organizaciones buscan la mejora de las condiciones de quienes producen, así como facilitar el acceso a alimentos sanos, seguros y soberanos a lxs consumidorxs. Alimentos producidos por una agricultura que poco a poco se hace más visible en la escena social y la arena política a fuerza de verdurazos y alimentazos, entre otras acciones, que trabaja en pequeña y mediana escala, y que hace mucho está atravesada y condicionada por múltiples limitantes: inestabilidad de ingresos, dificultad en el acceso al crédito, vulnerabilidad antes los cambios macroeconómicos, dificultad de acceso a tecnología apropiada, fragilidad en el acceso a la tierra, limitaciones para la remuneración de todas las actividades realizadas, posición de debilidad en la negociación frente a otros agentes en la cadena comercial, altos costos y dificultades de acceso a infraestructura y movilidad propias, situación de informalidad, y contando...

Invisibles, invisibilizados, o no visibilizados por mucho tiempo, organizaciones sociales y gremiales, proyectos, emprendimientos e instituciones vinculadas a esta agricultura, también llamada familiar, y más ampliamente a la economía popular, en plena cuarentena salen de las sombras del supermercado para acercar a la población alimentos de calidad y exentos de especulación. También se organizan para realizar donaciones de toneladas de alimentos, productos sanitarios y juguetes, o en otras palabras, para gestionar la solidaridad.

Mientras algunas grandes empresas concentradoras que reciben jugosos subsidios despiden a sus empleadxs para presionar al gobierno en plena pandemia, otras especulan y/o negocian con los precios de los alimentos y otros productos básicos, y quienes se hacen llamar “el campo” recientemente solo se movieron poco para intentar frenar la actualización de los impuestos a las exportaciones, lxs excludixs, lxs marginadxs, lxs que producen nuestros alimentos día a día muchas veces pagando costosos alquileres por las pocas hectáreas de tierra que trabajan, desplazados de a miles a los cordones de pobreza de las grandes ciudades desde hace años debido al avance del agronegocio concentrado y la especulación inmobiliaria, son quienes siguen levantándose todos los días para alimentar a la población. También en las ciudades, muchas personas comenzaron a organizar compras colectivas para sus vecinxs, incluso creando [plataformas que acercan a los comercios de proximidad con compradorxs](#) sin costo alguno. Está claro que solo el pueblo salva al pueblo.

Es que el distanciamiento social impuesto por la pandemia del COVID-19 pone sobre la mesa el distanciamiento que caracteriza a nuestro sistema agroalimentario, no solo por la distancia geográfica entre la semilla y el plato, sino también por la cantidad y complejidad del entramado de actores que participan de él. Desde la producción al consumo se atraviesan diversas jurisdicciones, en particular para llevar alimentos a las ciudades, y se realiza un pase de mano a mano entre estos actores en los que se va distribuyendo de manera injusta la renta y la ganancia. Al contraponer este sistema a los circuitos cortos que propone la economía alternativa se vuelve más evidente lo ilógico, ineficiente e inhumano de la producción, distribución y comercialización

de los alimentos en el actual sistema agroalimentario hegemónico, a la vez que plantea un escenario nuevo y desafiante, que expresa restricciones pero también potencialidades para los colectivos involucrados en crear algo nuevo.

En las organizaciones sociales, emprendimientos e instituciones contactadas para este artículo, la articulación entre la producción y el consumo asume diversas formas, si bien todas tienen por objetivo disminuir la cantidad de intermediarios, acercando a lxs productorxs con lxs consumidorxs. Existen grupos de productorxs que han generado áreas de comercialización, o que se encuentran integrando organizaciones más amplias donde articulan con diversos actores y colectivos. A su vez, algunas organizaciones se han gestado en torno a la conformación de canales de comercialización y distribución solidarios, buscando articular los colectivos de producción popular con lxs consumidorxs. En algunos casos, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos-Rama Rural (MTE-Rural), se llega a sostener que se trata de una intermediación política o una “no intermediación” o, como en el caso del Instituto para la Producción Popular, de una forma de comercialización de transición que tenderá a desaparecer a medida que se autoorganice el consumo popular.

Tres formas básicas se han implementado para llevar adelante la distribución y comercialización de alimentos. Por un lado, nodos de entrega y ferias, lugares y días puntuales donde se encuentran consumidorxs y productorxs. Por otro, algunas organizaciones sostienen un formato similar a almacenes, que abren la posibilidad de venta directa.



Mercado agroecológico de Avellaneda.
Fuente: Instagram @almacenutt

El tercer mecanismo es el de las entregas domiciliarias de bolsones de verduras (agroecológicas, en transición o convencionales) y otros productos cooperativos, lo que está resultando especialmente atractivo para las poblaciones urbanas que no quieren o no pueden salir de sus casas. En cada caso la logística, el tipo y cantidad de trabajo requerido, la infraestructura necesaria y los gastos asociados son diferentes. Consecuentemente las potencialidades, las dificultades y las estrategias posibles también son diversas.

La incertidumbre en los días cercanos a la cuarentena y la posterior declaración de su obligatoriedad actuaron inicialmente refrenando las ventas de estos emprendimientos, especialmente en los nodos y ferias: mientras los supermercados no vieron interrumpida su operatoria, no hubo esfuerzos públicos para sostener estos canales alternativos. Sin embargo, pasados los primeros días, la demanda de alimentos, especialmente de bolsones enviados a domicilio, no dejó de crecer. La cantidad de pedidos, de productos por pedido y de compradorxs se incrementó. No un poco, sino mucho, en algunos casos llegando a duplicarse o incluso [multiplicarse por diez](#). Sobre la base de los cálculos realizados por el INTA EEA AMBA y la información que recopilamos mediante entrevistas y encuestas a organizaciones, estimamos, aunque solo sea una aproximación, la cantidad de verduras que distribuyeron mediante bolsones en una semana estos colectivos: no menos de 70 toneladas se entregaron solo en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires entre los últimos días de marzo y los primeros días de abril (al no poder realizar ferias, salvo excepciones, el resto debió venderse a través de los canales concentradores). Desde nuestras casas, disponibles para recibir, y sin mucho ánimo ni posibilidades de salir, hicimos estallar esta demanda de bolsones. Las redes sociales y el boca en boca funcionaron como un amplificador de la difusión de los emprendimientos, llegando a personas a las que antes no se había logrado interesar. Se multiplicaron pedidos y aparecieron nuevos compradorxs. Más consultas, más bolsones, más hogares. Más llamados, más whatsapps, más planillas para procesar, más pedidos para organizar, más horas de flete. Para dar abasto con la demanda, en algunos casos, como el de Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), se están creando nuevos nodos de entrega, organizados de manera autogestiva entre vecinxs.



Nodo autogestivo en el barrio porteño de Villa Crespo.

La primera dificultad que se hizo evidente para esta economía alternativa fue el aumento de la demanda de trabajo y, teniendo en cuenta además que las personas de riesgo debieron ser reemplazadas en sus labores, algunos emprendimientos y organizaciones debieron incrementar las horas trabajadas por cada persona, y otrxs sumaron personas nuevas a las tareas. Pero esta realidad nos recuerda una de las limitantes históricas de estos colectivos: la organización y remuneración de las tareas en la economía popular. Son pocas las organizaciones que pueden remunerar todas las tareas, mientras que la mayoría combina alguna forma de retribución con trabajo voluntario. La frontera entre militancia y trabajo se vuelve muy delgada en algunos casos: de esta manera es que muchas veces se intenta suplir el poco o nulo acompañamiento del Estado, que termina favoreciendo en la gran mayoría de los casos al capital concentrado.

En segundo lugar, la disponibilidad de fletes y la gestión de los permisos de circulación son problemas que se registran no solo en la entrega de bolsones, sino que también atraviesa todas las formas de comercialización y producción, ya sea para la circulación de insumos o colocación de la producción en los espacios de acopio. El acceso a la movilidad, siempre crítico para estos emprendimientos, hoy es una limitación más que evidente. Quienes no cuentan con vehículos propios deben recurrir al contrato de fletes, debiendo negociar las tarifas. Asociado a esto se suma la dificultad de gestionar los permisos de tránsito, lo que fue fácil para muchas organizaciones, y que ha ocasionado complicaciones en los retenes policiales y el cobro de multas. Esto genera un temor añadido al del contagio en los propios fleteros, quienes muchas veces no quieren realizar viajes entre jurisdicciones diferentes. Pasados los días de cuarentena y la experiencia, se comenzó a organizar y formalizar la movilización de producción, la ampliación de permisos de circulación, y así algunos problemas se fueron solventando. Algunos colectivos pudieron adaptar sus entregas de bolsones a modalidad de venta a domicilio. Y aunque esto constituye una mejora, la limitante estructural de la ausencia de movilidad propia y la dependencia en la negociación de los costos del transporte sigue siendo un factor de peso en la implementación de estos canales.

Con las nuevas reglas que impone la cuarentena obligatoria, la circulación de insumos y materias primas se ve afectada. Comienza a haber algunos faltantes y dificultades de acceso a semillas, plantines, bolsas para el armado de los pedidos, cajas e insumos de limpieza, entre otros productos. Estos faltantes se asocian no sólo a problemas en la producción sino que también se registran por las mencionadas dificultades en el transporte. Algunxs agentes del INTA hacen esfuerzos por subsanar este problema y que la gente pueda seguir produciendo a través de la distribución de plantines.

La pandemia y la crisis alimentaria vuelven a poner el foco sobre viejos problemas estructurales de la producción a pequeña y mediana escala, y sobre las cadenas agroalimentarias: el acceso a la infraestructura, la movilidad, el financiamiento, las formas y herramientas de formalización de los canales de comercialización, las políticas impositivas. Como en un sistema de espejos, el foco se refleja sobre la discusión de las políticas públicas y sus posibles impactos diferenciales. Sin negar las urgencias indeclinables del hambre en el país, nos preguntamos en qué medida ciertas políticas que buscan paliar la crisis alimentaria pueden terminar favoreciendo la concentración en el sector: por ejemplo, la nueva tarjeta alimentaria difícilmente pueda emplearse en estos emprendimientos por algo tan burdo y terrenal como que se necesita un posnet, con todo lo que ello implica (trámites, ciertas figuras fiscales, gastos fijos, etc.). Hace tiempo, por ejemplo, organizaciones gremiales de pequeñxs productorxs como la UTT o el MTE-Rural vienen intentando sin éxito que el Estado les dedique parte de las compras públicas a sus productos.

Afortunadamente, algunas acciones del Estado están dando cuenta de cierto despertar respecto de la importancia y las potencialidades de este tipo de economías alternativas. La designación de un dirigente de la UTT al frente del Mercado Central es tal vez la más rimbombante, y promete la posibilidad de limitar la especulación, expandir la agroecología y desconcentrar la comercialización; o al menos de hacer el intento. Esto acompaña el ingreso de funcionarixs provenientes de los movimientos sociales y organizaciones de pequeñxs productorxs rurales en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, así como la creación de la Dirección de Agroecología en su seno, cambios que venían mostrando esta otra cara del Estado desde antes de la pandemia. Mientras tanto, sin embargo, se sigue fumigando a las poblaciones rurales para producir commodities agrícolas que, como se está viendo a cabalidad, no alimentan estómagos humanos en estas latitudes, y se sigue considerando este tipo de producción, junto a industrias extractivas como la minería a cielo abierto, "actividades esenciales".

Este es un momento privilegiado para poner sobre la mesa (y esta vez hablamos de las mesas en las que se toman las decisiones) la discusión del origen y calidad de los productos que consumimos, las formas de producción, distribución y comercialización, y la generación de empleo

dentro del sistema agroalimentario; a sabiendas de las contradicciones propias de las pujas por las políticas públicas, hoy todo está en discusión. Ya no se trata solo de intentar, beneficiando a grandes comercializadores y procesadoras, de asegurar la cantidad necesaria de calorías que llenen panzas para evitar saqueos y otros desmanes, y reforzar el orden social poniendo a las fuerzas policiales a controlar y amedrentar a quienes se atreven a generarlos. Se trata de construir y expandir las bases para que se pueda ejercer soberanamente el derecho a la alimentación sana y el empleo digno, apoyando a las economías populares y a lxs pequeñxs productorxs rurales. El agronegocio, la industria alimenticia concentrada y las cadenas de supermercados, que desplazan y someten a estxs productorxs, no solo no alimentan a la población ni generan trabajo, sino que se basan en un sistema que debilita los cuerpos con cócteles de agroquímicos y alimentos ultraprocesados. Estamos ante una encrucijada que necesita salidas novedosas, que piense a la vez en los estómagos vacíos de hoy, pero también en aquellos que querrán llenarse mañana.

La pregunta es, a fin de cuentas, si las múltiples crisis que vivimos pueden ser efectivamente una oportunidad.

Y para quiénes.

Agradecemos por el tiempo dedicado a las entrevistas y encuestas durante un momento tan crítico a:

[UTT](#)

[Pueblo a Pueblo \(MTE Rural\)](#)

[Iriarte Verde](#)

[Todos Comen](#)

[Amaranto](#)

[Almacén Autogestivo](#)

[MiBarrio.chat](#)



**Instituto de Altos
Estudios Sociales**
IDAES_UNSAM

Más información
investigacionidaes@gmail.com